

ANTIOQUIA

cómovamos



# 2026 Retos de Antioquia





## RETOS DE ANTIOQUIA 2026

Desde inicios de 2025, el programa ha realizado seguimiento a los principales problemas públicos identificados como prioridades para Antioquia, a partir de los Informes de Calidad de Vida. Este ejercicio ha permitido monitorear la evolución de dichos desafíos, analizar sus tendencias recientes y reconocer las brechas persistentes que afectan la calidad de vida de la población en las distintas subregiones del departamento.

En este contexto, se presenta la edición 2026 de Retos de Antioquia, cuyo propósito es dar continuidad al seguimiento de los retos previamente priorizados e incorporar nuevos desafíos que emergen de las transformaciones sociales, demográficas, económicas y ambientales del territorio.

El documento busca aportar insumos técnicos y con evidencia para orientar la agenda pública departamental, con una mirada de mediano y largo plazo que permita consolidar avances, reducir desigualdades territoriales y anticipar algunos cambios que marcarán el futuro de Antioquia.

- **En Antioquia se agudiza la violencia de las estructuras armadas ilegales y persiste la que padecen las mujeres en sus hogares**

Antioquia es uno de los departamentos con mayor presencia y expansión de estructuras armadas ilegales, que actualmente tienen injerencia en al menos el 86% de sus municipios. Esta disputa por el control territorial y el dominio de rentas ilícitas —como la minería ilegal, el narcotráfico, el microtráfico, la extorsión y el tráfico de migrantes— detonó un recrudecimiento de la violencia en 2024: los enfrentamientos armados aumentaron un 55% y el accionar de estas estructuras fue la causa determinante del 85% de los homicidios en el departamento.

La violencia no se queda entre los ilegales. La fuerza Pública y la población están bajo presión. En 2024 las agresiones contra la Fuerza Pública en Colombia crecieron un 32% y Antioquia fue el departamento con más uniformados asesinados (22) y el tercero con más heridos (70).

La crisis humanitaria es histórica y persiste: cerca de 26 mil personas fueron desplazadas en 2024 y miles más fueron víctimas de amenazas, extorsiones, restricciones de movilidad y otros hechos victimizantes.

Frente a este escenario, si bien las autoridades territoriales y el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV) han activado rutas de asistencia, la capacidad de respuesta reactiva resulta insuficiente ante la magnitud del conflicto. Es imperativo que se implementen acciones efectivas de seguridad a nivel nacional que garanticen el cese de la violencia y la

protección real de la sociedad civil. Esto es fundamental para que las medidas de atención y reparación no sigan siendo necesarias para miles de personas cada año en el departamento.

La violencia en el departamento no se circunscribe al accionar de grupos armados o a la conflictividad callejera; permea la esfera privada con un impacto desproporcionado sobre las mujeres. La violencia basada en género mantiene una tendencia al alza sostenida desde la pandemia, registrando en 2024 un promedio alarmante de 65 casos diarios (22.947 en total). La gravedad de estas cifras se ve opacada por un subregistro estimado del 64%, alimentado por el miedo, la normalización de la agresión y, fundamentalmente, la desconfianza institucional.

Esta percepción de ineficacia tiene un respaldo crítico en la realidad procesal: según la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), la impunidad alcanza el 93% en casos que son archivados en etapa de indagación. Este vacío de justicia no solo perpetúa el silencio de las víctimas, sino que eleva el riesgo de feminicidio, evidenciando que la protección de la vida de las mujeres sigue siendo el desafío ético y de seguridad más apremiante para la institucionalidad.

Frente a este panorama, los retos para Antioquia son estructurales y deben abordarse de manera simultánea. En primer lugar, es imperativo desarticular las finanzas y la capacidad operativa del crimen organizado, golpeando estratégicamente las rentas ilícitas que oxigenan su poder. Sin embargo, la estrategia de control debe ir acompañada de una transformación territorial: se requiere generar alternativas de desarrollo sostenible en las zonas vulnerables, permitiendo que las economías lícitas compitan y desplacen a las ilegales como opción de vida digna.

Finalmente, resulta urgente cerrar la brecha de legitimidad entre el Estado y la ciudadanía. Esto implica fortalecer el tejido comunitario y garantizar un acceso real a la justicia que reduzca la impunidad. Solo integrando control territorial, inversión social y fortalecimiento institucional será posible transitar hacia una seguridad integral y sostenible, donde la convivencia y la protección sean derechos efectivos en todos los rincones de Antioquia.

- **Aumento en la inseguridad alimentaria refleja históricos en desnutrición aguda**

La inseguridad alimentaria continúa siendo un reto en el departamento, el aumento de precios en los alimentos (+71%) desde la pandemia podría explicar la prevalencia.

La medición más reciente de la Escala de Experiencia de Inseguridad Alimentaria (FIES) realizada por el DANE muestra que en el último año en Antioquia la inseguridad alimentaria moderada o severa superó la cifra nacional y aumentó entre de 22% en 2023 a 28% en 2024, mientras en Colombia se mantuvo estable en 26% entre ambos años. Adicionalmente, el indicador es mayor en la ruralidad

(33%) frente a los centros urbanos (27%), lo cual invita a la reflexión en torno al funcionamiento actual de los sistemas agroalimentarios en el departamento.

Si bien el acceso a una cantidad oportuna de alimentos es importante para un porcentaje importante de los hogares, la calidad de estos es fundamental para una base más amplia: la preocupación por los alimentos (41%), la falta de alimentos saludables (39%) y la poca variedad (36%), son las principales tres experiencias que reportan los hogares en el departamento, a 2024 el porcentaje de hogares que las experimenta aumentó entre 4 y 9 puntos porcentuales (p.p.).

En este mismo sentido, se identifica el mayor número de menores de cinco años con desnutrición aguda, pasando de 2.050 en 2023 a 2.547 durante 2024. A nivel subregional las alertas se concentran en Urabá (805,0), Magdalena Medio (686,6) y Nordeste (633,9), dado que superan el promedio departamental de 601 menores en esta condición por cada cien mil en la edad.

Si bien en todas las subregiones se registra un aumento en el porcentaje de hogares en inseguridad alimentaria moderada o severa entre 2021 y 2023, las diferencias entre ellas se han profundizado. Mientras en Urabá, Bajo Cauca, y Magdalena Medio este indicador es superior al 50%, en Oriente y Suroeste no supera el 31%.

En este contexto, es necesario para Antioquia un sistema de información que permita estimar el número de tamizajes realizados a infantes en un año, tal como existe en Medellín. Sólo de esta forma se puede identificar si el aumento en la desnutrición es por mayores condiciones de vulnerabilidad o por un mejoramiento en la detección de los casos.

- **Crisis en el sistema de salud se refleja en la calidad y pertinencia de los servicios de atención**

Actualmente, el sistema de salud en Colombia reporta uno de sus momentos más turbulentos en sostenimiento financiero. Según la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (2025), las EPS adeudan aproximadamente 20,3 billones de pesos a 225 instituciones que reportaron información a diciembre de 2024. En este año, el 92% de los afiliados del departamento se encontraba en alguna EPS intervenida o con retiro voluntario (cálculos propios a partir de Seccional de Salud de Antioquia - Gobernación de Antioquia).

Dicho contexto se traduce en afectaciones a la calidad de vida de la población. Mientras en 2021 el 34% afirmaba que la facilidad en el acceso era buena o muy buena, en 2023 esta cifra descendió al 30% (Encuesta de Calidad de Vida de Antioquia – Gobernación de Antioquia). Esta percepción negativa se puede encontrar sustentada en el aumento en el tiempo promedio de espera para la asignación de citas médicas, aún más al considerar que desde 2021, Antioquia ha alcanzado su máximo histórico, y en los últimos dos años, superó a Bogotá

D.C. y al promedio nacional. En promedio, los habitantes de Antioquia deben esperar 2 días más que alguien que vive en Bogotá o Valle del Cauca, y 3 días más que alguien que vive en Atlántico o Bolívar (Informe sobre Goce Efectivo del Derecho a la Salud 2024 – Ministerio de Salud).

Por otro lado, se registra un aumento del 24% en los reclamos a las EPS frente a la Superintendencia de Salud, llegando a 273 mil en 2024, y del 47% en las tutelas por derecho a la salud presentadas a la Corte Constitucional, alcanzando los 54 mil. Los principales motivos tanto en los reclamos como en las tutelas se relacionan con la asignación de citas médicas y la entrega oportuna de medicamentos o insumos.

En definitiva, si bien el acceso al derecho a la salud se encuentra en entredicho de forma cada vez más frecuente en el país, Antioquia es uno de los departamentos más afectados por la problemática, desde aumento en los días de atención hasta históricos en tutelas y reclamos, son muestra de la necesidad de intervenciones locales que busquen mitigar los efectos de la crisis nacional en la calidad de vida de los habitantes del territorio.

### • Envejecimiento

Antioquia está envejeciendo más rápido de lo que se tenía estimado. Este envejecimiento está asociado al cambio demográfico, que en las últimas décadas ha estado marcado por una caída acelerada en la tasa de natalidad y de fecundidad acompañada de una tasa de mortalidad que se mantiene constante.

Una manera sencilla de evidenciar el envejecimiento de la población es comparar la proporción de niños y de adultos mayores dentro de la población, y su evolución a través de los años. En 1985, el 27% de la población era menor de 12 años y solo el 7% tenía más de 60 años. En 2025, ambos grupos pesan lo mismo: 16% cada uno. Para 2050 la relación se invertirá: los adultos mayores representarán un 28% del total de la población y los niños menores de 12 años representarán un 9%. Oriente, Suroeste y Valle de Aburrá son las subregiones más envejecidas, pues actualmente más del 17% de su población es mayor de 60 años.

El envejecimiento se traducirá en un aumento de la dependencia económica, entendiéndola como la relación entre la población “dependiente” (menores de 15 años y mayores de 65 años) y la población “activa” (entre 15 y 64 años). A 2025, el índice de dependencia económica es del 45%, se espera que en los próximos 25 años alcance un máximo del 49%, alcanzando niveles similares a los del 2018. Sin embargo, la gran diferencia es que antes la alta dependencia económica se daba por el alto peso poblacional que tenían los más jóvenes, mientras que en el 2050 la alta dependencia económica será por el alto peso poblacional de los adultos mayores.

En el informe “Colombia Envejece: las oportunidades de una sociedad longeva”, se enfatiza en la importancia de fortalecer la educación a lo largo de la vida, a partir de la recapacitación y el reentrenamiento en habilidades de autogestión, trabajo con personas, solución de problemas y uso de tecnologías. Así mismo, recomienda aprovechar la digitalización y la inteligencia artificial para cerrar brechas en el aprendizaje e incluir productivamente a la población mayor (Fundación Saldarriaga Concha & Inclusión SAS, 2025).

Al respecto, otro cambio importante que se ha evidenciado en los últimos años es el aumento en la participación laboral de los adultos mayores en Antioquia, que entre el 2021 y el 2024 pasó del 25% al 30%. Este aumento puede responder tanto al deseo de mantenerse activos laboralmente como a la necesidad de generar ingresos ante la falta de una pensión.

Según la Encuesta de Percepción Ciudadana de Medellín 2022, el 55% de las personas manifestó no sentirse preparado económica y financieramente para enfrentar la vejez. Además, un 38% de las personas consideran que los servicios de cuidado que vaya a necesitar durante su vejez deben ser asumidos por las familias, mientras que un 31% no lo ha pensado.

Lo anterior cobra relevancia cuando vemos que otro de los cambios demográficos que se ha observado es la reducción en el tamaño de los hogares, cerca de la mitad de los hogares del departamento está compuesta por una o dos personas, lo que seguramente va a dificultar cada vez más la disponibilidad de la familia a ofrecer los servicios de cuidado para los adultos mayores en el futuro.

Es más, de acuerdo con la Encuesta de Calidad de Vida de Antioquia 2023, el 83% de las personas manifestó que los adultos mayores de su hogar no requieren cuidado, y del total de adultos mayores que lo requieren (aproximadamente 173.600), el 58% lo recibió de sus hijas y el 16% de sus hijos. Por otro lado, el 22% de los niños menores de 5 años son cuidados por sus abuelas o abuelos, lo que lleva a la necesidad de explorar con más detalle las implicaciones que el cambio demográfico traerá en la prestación del servicio de cuidado de los adultos mayores, y en este sentido abrir el debate sobre quien cuidará a los cuidadores.

- **Participación laboral con brechas y oportunidades**

La participación laboral es el primer eslabón en el mercado laboral, el cual permite a las personas acceder a seguridad social, un ingreso digno y bienestar laboral. Este indicador se refiere al porcentaje de personas en edad de trabajar que se encuentran activas en el mercado laboral, es decir, aquellos que se están ocupados o que están buscando empleo, su análisis refleja las oportunidades y desigualdades presentes en el mercado laboral del departamento.

De acuerdo con cifras del DANE, en 2024 Antioquia registró una tasa global de participación del 63,8%. Si bien este indicador se mantuvo prácticamente inalterado frente a 2023, persisten brechas significativas a nivel territorial y de género. Al comparar con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, donde la tasa alcanzó el 66,1%, se evidencian diferencias importantes entre hombres y mujeres. Mientras la participación laboral masculina fue del 76,3% en el Área Metropolitana y del 76,9% en el promedio departamental, la participación femenina se ubicó en 57,3% y 51,8%, respectivamente, lo que da cuenta de una brecha de género persistente.

La no participación en el mercado laboral responde a múltiples factores, que incluyen tanto limitaciones estructurales —como la escasez de oportunidades laborales o la desconexión entre la oferta y la demanda de trabajo— como condiciones personales y cargas de cuidado presentes en los hogares. En este contexto, para 2024 se identificaron 158.170 personas que no participaron en el mercado laboral pese a manifestar su disposición a trabajar; de este grupo, el 71% eran mujeres y el 67% se encontraba dedicado a oficios del hogar. De lograrse la integración efectiva de estas personas al mercado laboral, la tasa de participación podría aumentar hasta 78,1% para los hombres y 55,6% para las mujeres, reduciendo parcialmente las brechas existentes.

El principal reto, por tanto, consiste en identificar y remover las barreras que limitan la participación laboral, así como en acompañar a las personas en su proceso de inserción efectiva al empleo. Avanzar en esta dirección resulta fundamental, dado que la participación laboral constituye uno de los primeros pasos para mejorar las condiciones de vida de la población y fortalecer la inclusión económica en el territorio.

- **Alta informalidad por fuera del Área Metropolitana**

La informalidad laboral en Antioquia es elevada y se intensifica por fuera del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Según cifras del DANE, la tasa de informalidad en el departamento para 2024 fue del 43,9%, proporción que asciende al 62,4% cuando se excluye el Área Metropolitana.

Al analizar estas dinámicas con mayor detalle, se evidencia que el principal problema estructural se concentra en los trabajadores independientes. En este grupo, el 96,2% reportó no cotizar al sistema de seguridad social, ya sea a salud o a pensión. De igual manera, el 86,3% ejerce su actividad económica sin contar con los registros requeridos ante una cámara de comercio o sin llevar una contabilidad formal de su negocio.

Dentro de este conjunto de definiciones de informalidad, ha cobrado especial relevancia la figura de los trabajadores del “rebusque”. Estos corresponden a trabajadores independientes que carecen de contrato laboral, no están afiliados al sistema de seguridad social y desarrollan actividades de baja especialización, las cuales, por sus características, son particularmente propensas a operar bajo esquemas no formales de contratación.

En el caso de Antioquia, en 2024 el 22,7% del total de los ocupados se encontraba trabajando bajo esta modalidad, lo que representó el 71,2% de los trabajadores independientes. Es importante destacar que esta proporción asciende al 83,2% en los territorios por fuera del Área Metropolitana. El peso de los trabajadores del “rebusque” evidencia que en gran parte del territorio el empleo funciona más como una estrategia de supervivencia que como un mecanismo de movilidad social. Esto limita el recaudo, debilita la sostenibilidad del sistema de protección social y restringe las posibilidades de desarrollo económico de largo plazo.

En este contexto, el gran desafío para Antioquia es transitar de economías locales basadas en el “rebusque” hacia esquemas productivos más formales, lo cual exige políticas diferenciadas por subregión, fortalecimiento empresarial, acompañamiento a los trabajadores independientes y una estrategia clara de formalización que vaya más allá del cumplimiento normativo y aborde las condiciones reales de productividad y acceso a ingresos estables.

- **Pertinencia en educación superior y reducción matrícula en formación técnica y tecnológica**

Aunque entre 2023 y 2024 se registró un aumento del 2% en la matrícula de programas de pregrado, rompiendo la tendencia decreciente observada hasta 2023, Antioquia continúa enfrentando retos estructurales. Uno de los más relevantes es la creciente percepción de desconexión entre el estudio y el trabajo, ya que cerca del 70% de los jóvenes considera que su formación no



guarda relación con su inserción laboral. Este desajuste se refleja también en la distribución de la matrícula por niveles de formación, donde se muestran disparidades.

Mientras la matrícula en programas universitarios aumentó en 8.182 estudiantes entre 2019 y 2024, la formación técnica y tecnológica registró una reducción de 28.241 estudiantes en el mismo periodo. Esta tendencia resulta especialmente preocupante, dado que este tipo de formación es clave para la provisión de mano de obra calificada, la rápida inserción al mercado laboral y el fortalecimiento de sectores productivos estratégicos, por lo que su debilitamiento puede limitar el desarrollo económico y la competitividad del departamento.

Para lograr la reducción en las brechas en términos de educación superior, es necesario dar un mayor fortalecimiento a la formación técnica y tecnológica no solo a nivel departamental sino también a nivel subregional, ya que este tipo de formación también es una opción educativa pertinente, alineada con las necesidades del mercado laboral.

Asimismo, es importante impulsar una mayor articulación entre las diferentes instituciones educativas, el sector empresarial y entidades públicas como el SENA, que garanticen la formación profesional necesaria, además de socializar e implementar programas educativos con más componentes prácticos y rutas claras de inserción laboral y continuidad hacia la educación universitaria.

- **Desde pandemia el sistema educativo aún no recupera la asistencia escolar**

Desde 2019, tal como se había presentado en el Informe de Calidad de Vida de Antioquia Cómo Vamos 2024, la matrícula escolar en el departamento antioqueño mantiene una tendencia decreciente que no ha logrado revertirse tras seis años de la pandemia del COVID-19. Aunque entre 2019 y 2025 la población entre 5 y 16 años se redujo en 5,4% según proyecciones del DANE, la matrícula total cayó en mayor proporción, siendo esta reducción del 12,3%, lo que implica una variación neta negativa de 6,9 p.p. Esta reducción se observa en todas las subregiones, pero es más marcada en Bajo Cauca, la cual presentó una reducción de 24,4%, seguida de Magdalena Medio, la cual fue de 22,1% y Nordeste, 20,6%.

Adicionalmente, al diferenciar por niveles educativos, es preocupante ver que el mayor retroceso se concentre en preescolar, con una caída de 27,3%, lo que

sugiere barreras de acceso desde el primer año escolar y aumenta el riesgo de rezago y mayores dificultades en los ciclos posteriores, afectando el desarrollo educativo y la adquisición de aprendizajes.

Por su parte, en educación media, si bien la matrícula había aumentado y alcanzado su máximo en 2023, desde entonces se presenta también una disminución, y en los últimos dos años se redujo en 4.375 estudiantes, lo que representa un riesgo para la culminación del ciclo educativo y el tránsito hacia la educación superior.

Para revertir esta situación, se deben orientar mayores esfuerzos a la recuperación en la asistencia escolar, en especial en los municipios más afectados. Esto implica un mayor fortalecimiento en el acceso, especialmente en los grados de preescolar, buscar nuevas políticas para reducir las barreras que enfrentan las familias para acceder y permanecer en el sistema educativo y ampliar la oferta educativa en las subregiones más afectadas. También, es importante continuar con las estrategias de acompañamiento en educación media que apoyen la permanencia y finalización del ciclo educativo, facilitando el tránsito hacia la educación superior o la formación para el trabajo.

- **Se mantiene el bajo nivel de desempeño en lectura crítica, principalmente en zonas rurales**

De acuerdo con el último Informe de Calidad de Vida de Antioquia Cómo Vamos 2024, el desempeño en comprensión lectora evidencia brechas frente a otros departamentos comparables. En la prueba de lectura crítica, Antioquia obtuvo un puntaje promedio de 52 puntos, ubicándose por debajo de Cundinamarca (54 puntos), Santander (55 puntos) y el Valle del Cauca (53 puntos). Estos resultados muestran que el departamento enfrenta dificultades para alcanzar niveles de desempeño similares a los de otras regiones con características comparables.

Además, al interior del departamento, la brecha se profundiza al comparar el desempeño entre zonas rurales y urbanas. Mientras que en las áreas urbanas cerca del 63% de los estudiantes alcanza las competencias mínimas en lectura crítica, en las zonas rurales esta proporción se reduce a aproximadamente el 41%, lo que representa una diferencia de 22 puntos porcentuales.

Esta brecha es considerablemente mayor que la observada en departamentos como Boyacá (15 p.p.), Santander (16 p.p.) y Valle del Cauca (11 p.p.). Aunque el desempeño urbano de Antioquia es similar al de estos departamentos, el rendimiento en el sector rural se encuentra rezagado. Estas disparidades constituyen un reto central para el departamento en términos de equidad y calidad del aprendizaje.

Este escenario muestra la necesidad de orientar una política educativa en Antioquia hacia el fortalecimiento de la comprensión lectora, especialmente en las zonas rurales del departamento donde este rezago es mayor. Para esto, es fundamental continuar con el apoyo a la formación de los docentes, impulsar estrategias pedagógicas acordes al contexto, al igual que asegurar la disponibilidad de recursos de lectura adecuados en las diferentes instituciones educativas.

- **Mayor cantidad y criticidad de eventos de origen natural y una alta vulnerabilidad ante el cambio climático**

Los eventos de origen natural en el departamento dejan visible las desigualdades territoriales existentes frente a la gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático, dado que son los municipios con mayores condiciones de amenaza a desastres naturales y vulnerables al cambio climático, los que no cuentan con las capacidades necesarias para enfrentarlos.

Durante los últimos años, los eventos de desastre en Antioquia son cada vez más frecuentes e intensos, siendo el segundo departamento con más registros desde hace dos décadas, además de que su frecuencia se ha multiplicado por siete en la misma cantidad de tiempo, pasando de un promedio de 50 eventos anuales entre 1998 y 2007 a 357 entre 2019 y 2023, siendo un 93% de ellos de origen climático (inundaciones, deslizamientos, avenidas torrenciales), lo que evidencia una creciente vulnerabilidad ante el cambio climático. A esto se suma que, actualmente, 58 municipios están en amenaza alta o muy alta y 27 en amenaza media, lo que significa que son más susceptibles a eventos de origen natural.

Estos eventos de desastre suelen dejar grandes pérdidas materiales, dependiendo de su magnitud y las condiciones de riesgo de los territorios. Antioquia se ubica como el segundo departamento con mayores afectaciones a infraestructura por desastres naturales, con un total de 1.598 entre 2019 y 2023, viéndose principalmente afectado las vías terciarias, lo cual crea un aislamiento territorial que impide el desarrollo económico y social de las comunidades afectadas.

Todo lo anterior, sumado además a presiones hacia los ecosistemas como lo es la pérdida de cobertura arbórea, son un reflejo de que Antioquia debe repensar la planificación territorial alrededor de la prevención de desastres y la adaptación al cambio climático, con especial énfasis en territorios alejados que presentan altas vulnerabilidades.

- **Una gestión de residuos sólidos sin visión a largo plazo**

En Antioquia, el modelo actual de gestión de residuos sólidos está llegando a un punto crítico en términos ambientales y operativos, por lo cual es importante avanzar en alternativas que permitan reducir los residuos que terminan en los rellenos sanitarios, fomentando programas de economía circular que creen una cultura de la separación y el aprovechamiento.

En 2024, en Antioquia se dispusieron más de 1.619.540 toneladas de residuos sólidos, siendo la gran mayoría en rellenos sanitarios y en una menor cantidad en celdas transitorias y botaderos a cielo abierto. Sin embargo, para diciembre de 2024, el 43% de los municipios dependen de sitios de disposición final con una vida útil entre 3 a 6 años, y únicamente el 16% cuenta con sitios de disposición final con una vida útil mayor a 9 años.

La presión sobre la vida útil es aún más preocupante si se tiene en cuenta que, La Pradera, el principal relleno sanitario del departamento donde fueron llevados el 81% de los residuos dispuestos para 2024, tiene una vida útil proyectada hasta 2033. A su vez, Medellín, quien representó el 62% de los residuos dispuestos en La Pradera y el 45% de los residuos dispuestos en Antioquia en 2024, reportó una tasa de aprovechamiento de solo 14% en 2023 (Superservicios, 2024). Además de lo anterior, cerca del 90% de los municipios en Antioquia contemplan a La Pradera como un relleno de contingencia ante cualquier emergencia, ejerciendo aún más presiones ambientales sobre este.

Lo anterior da cuenta que los municipios de Antioquia deben reconfigurar sus modelos de gestión de residuos sólidos para evitar futuras crisis en un mediano plazo. La creación de una infraestructura adecuada para una recolección diferenciada y/o el aprovechamiento material y económico de los residuos es crucial para crear una cultura ciudadana de la separación.

La economía circular es un elemento clave que permitirá reducir los daños ambientales y sociales producto de la disposición actual de residuos sólidos, y al mismo tiempo que diversifica la economía y crea o mejora nuevas oportunidades de empleo.



# ANTIOQUIA cómo vamos



@antioquiacomovamos



@antioquiacomovamos



/Antioquia Como Vamos



Antioquia Como Vamos



[www.antioquiacomovamos.org](http://www.antioquiacomovamos.org)



[antioquiav@proantioquia.org.co](mailto:antioquiav@proantioquia.org.co)